

En General Roca, Provincia de Río Negro, a los 14 días del mes de enero del año 2026, reunida en Acuerdo la judicatura integrada con jueces de feria de la SALA II de la CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL, FAMILIA, DE MINERÍA Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA de la Segunda Circunscripción Judicial, después de haberse impuesto individualmente de esta causa caratulada "**R.A.M.D. C/ Q.C.D. S/ VIOLENCIA**", (**CH-00163-JP-2023**) () y discutir la temática del fallo por dictar, con la presencia de la Sra. Secretaria, emiten sus votos en el orden establecido en el sorteo practicado, los que se transcriben a continuación.

EL SR. JUEZ VICTOR DARIO SOTO DIJO:

I. Corresponde resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandado a contra la parte pertinente de la [providencia de fecha 26/11/2025](#), concedido en relación y con efecto devolutivo en fecha 29/12/2025.

II. Antecedentes del caso.

La providencia recurrida, en lo que aquí interesa, resuelve: "Luis Beltrán, 26 de noviembre de 2025. (...)

No obstante, dada la latente conflictividad, considero, en virtud de la naturaleza jurídica del presente trámite, que el planteo de un régimen de comunicación definitivo debe resolverse en un proceso de fondo, en tanto requiere un proceso específico con mayor análisis probatorio, que no está previsto en el marco del proceso de violencia. Dicho ello, hágase saber que a posteriori de la intervención ut supra establecida deberá recurrir por la vía procesal que corresponda. (...)".

III. Los agravios.

Contra esa forma de resolver, se alza el denunciado fundando sus [agravios](#).

III1. El primer agravio lo titula "Errónea interpretación del objeto del pedido y confusión de regímenes".

Alega que la jueza de primera instancia incurrió en una incongruencia al rechazar la solicitud bajo el argumento de que un "régimen de comunicación definitivo" debe resolverse en un proceso de fondo con mayor análisis probatorio.

El apelante aclara que nunca solicitó un régimen definitivo, sino la fijación de un régimen de comunicación provisorio, el cual sí es procedente dentro del marco del

proceso de violencia actual.

III.2. Segundo agravio titulado "Falta de fijación del régimen y omisión de valoración de las pruebas", el recurrente expresa que la resolución ignora por completo las constancias de la causa, específicamente los informes de la SENAF.

Menciona que estos informes, realizados tras más de trece encuentros de revinculación, concluyen que existe un vínculo afectivo positivo y saludable entre el padre y su hija (quien tiene tres años y síndrome de Down).

Manifiesta que la SENAF recomendó expresamente el cese de la intervención monitoreada por considerarla ya "contraproducente" y sugirió la implementación inmediata de un régimen provisorio en entornos cotidianos.

III.3. En su tercer punto de agravio señala la omisión de los dictámenes de la Defensoría de Menores y de facultades judiciales.

Se cuestiona que la jueza desatendió las reiteradas solicitudes de la Defensora de Menores, quien pidió la fijación del régimen provisorio para garantizar el interés superior de la niña.

Asimismo, se señala que el magistrado omitió ejercer las facultades que le otorga el artículo 149 del Código de Procedimientos de Familia (CPF), el cual permite disponer medidas provisorias en procesos de violencia familiar para preservar los vínculos afectivos y asegurar la tutela judicial efectiva.

Concluye la parte recurrente que la demora en fijar este régimen vulnera directamente los derechos de la niña a mantener un vínculo libre con su progenitor, haciendo prevalecer el conflicto entre adultos por sobre su bienestar.

IV. Contestación de agravios.

Corrido el traslado correspondiente, se presenta la respectiva [contestación de agravios de la actora](#).

La parte actora argumenta que la seguridad y la estabilidad emocional de la niña deben prevalecer sobre cualquier solicitud de contacto apresurada, fundamentando su postura en los graves antecedentes de maltrato físico y psicológico documentados.

Manifiesta a través de un relato detallado, expone cómo la dinámica de

dominación del demandado ha causado daños severos en la salud de sus hijas, justificando así que cualquier vinculación sea tratada en un proceso específico y profundo.

La actora solicita que el tribunal mantenga la suspensión del contacto para garantizar el interés superior de la niña frente a una conducta parental considerada peligrosa.

V. Dictamen de DEMEI

La DEMEI dictamina ([informe](#)) en el sentido de la modificación de la resolución respectiva.

VI. Análisis y solución del caso.

Para principiar el análisis, es necesario señalar que la judicatura no está obligada a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo a pronunciarse acerca de aquéllas que se estimen conducentes para sustentar las conclusiones (CS, doctrina de fallos 272:225; 274:113; 276:132; 280:320).

Llegados a esta instancia, se advierte que los postulados esgrimidos por la parte apelante resultan insuficientes para revocar lo decidido en primera instancia, y doy razones al respecto.

En efecto, no se desprende de los agravios vertidos la arbitrariedad, ambigüedad, imprecisión o el yerro de la resolución recurrida. De la atenta lectura de todas las piezas procesales encuentro que aquélla resulta acorde con el marco del proceso que se esta transitando.

Cabe tener presente que no se le ha negado de manera arbitraria la posibilidad de lograr un régimen de comunicación con su hija, sino que dicha pretensión sea canalizada por la vía procesal correspondiente y no dentro del presente proceso, el cual no fue pensado desde su naturaleza jurídica dar soluciones a la pretensión expuesta por el recurrente.

El proceso de violencia cuenta con pautas específicas, a los efectos de prevenir, sancionar, y erradicar hechos de violencia de genero y violencia familiar, con fines protectorio de las víctimas e involucrados.

Que en la tramitación de dicho proceso se han provisto medidas protectorias y

provisorias (arts. 148, 149 CPF) las cuales se rigen por pautas y reglas que el mismo código de rito determina. Entra las descriptas no se encuentra la de determinar un régimen de comunicación con los/as NNA involucrados.

Si bien es cierto que es de buena práctica judicial adoptar las medidas sin sustanciación, dado que el riesgo se puede incrementar con el transcurso del tiempo, tales como los alimentos provisorios para los/as hijos/as dada la estrecha relación que existe entre la dependencia económica y la posibilidad de mantener la denuncia en el tiempo, es a los efectos de evitar una faceta más de violencia como lo es la económica y brindar cobertura al derecho básico alimentarios de los involucrados más vulnerables.

Considero que respecto del régimen de comunicación es diferente, pues tal como lo afirmó la magistrada el planteo de un régimen de comunicación definitivo debe resolverse en un proceso de fondo, en tanto requiere un proceso específico con mayor análisis probatorio, que no está previsto en el marco del proceso de violencia pues lo excede.

Debe tenerse presente que aún en este proceso se cuenta con medidas protectorias vigentes, como lo es la prórroga de la prohibición de acercamiento del denunciado, y la Sra. R.A., conforme lo dictaminado en el [resolutorio](#) de fecha 27/11/2025.

A lo que se apunta, es que ante un pedido del establecimiento de un régimen de comunicación definitivo quien lo peticiona podrá dar pautas de establecimiento del mismo acorde tiempo, modo y lugar que se ajuste a sus necesidades y posibilidades ciertas de cumplimiento como objeto de su pretensión. Por otro lado, dará lugar a la madre en este caso a plantear su propuesta, abriéndose potencialmente en dicho proceso una posibilidad de acuerdo entre partes a los efectos de priorizar el derecho de la niña de lograr una comunicación fluida con su padre. No arribado un acuerdo será la magistrada quien lo establecerá pero con apoyatura en la pretensiones de ambas partes, y lo acreditado en dicho proceso.

Obsérvese además que de las constancias del proceso surge que dentro de éste se canalizó la revinculación del padre con la niña, quienes tuvieron encuentros monitoreados y de los cuales los [informes](#) que surgieron fueron positivos, despegando con posterioridad a ellos la presencia de factores de riesgo en la vinculación.

Pero entiendo que este trabajo realizado aquí ya ha cumplido su objetivo de

despejar las sospechas de que respecto de la niña existían hechos de violencia que ameriten el mantenimiento de medidas protectorias al respecto, y que a los efectos de concretar la implementación de un régimen comunicacional deberá canalizarse por la vía procesal correspondiente contando con la posibilidad allí de solicitar un régimen provisorio cautelar, contando en su respaldo lo logrado aquí en éste proceso.

En definitiva, no se ha acreditado ni la arbitrariedad ni la improcedencia de lo dispuesto, pues considero que no se le ha negado el derecho de solicitar un régimen de comunicación formal y definitivo con su hija menor de edad, ni se está afectando el derecho de Isabella de mantener un vínculo libre y sostenido con su padre, conforme lo establece la Ley Nacional 26.061 y la Ley Provincial 4109.

VII. Lo dicho es suficiente para rechazar la apelación interpuesta y en consecuencia confirmar la resolución atacada de fecha 26/11/2025. Propongo imponer las costas por su orden (art. 19 in fine CPF), y regular los honorarios de los Sres. letrados del recurrente Marina Baglioni y Rubi Horacio Zuain, en 2 JUS de manera conjunta y los del Defensor Oficial Diego Hernán en 2 JUS. **ASÍ VOTO.**

LA SRA. JUEZA DANIELA PERRAMÓN DIJO:

Por compartir lo sustancial de sus fundamentos, adhiero al voto que antecede. **ASÍ VOTO.**

EL SR. JUEZ JOSE MARÍA ITURBURU DIJO:

Ante la coincidencia precedente, me abstengo de opinar (artículo 242 1er. párrafo del CPCC).

Por ello la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia, de Minería y Contencioso Administrativa,

RESUELVE:

I) Rechazar la apelación interpuesta y en consecuencia confirmar la providencia de fecha 26/11/2025.

II) Imponer las costas por su orden (art. 19 in fine CPF).

III) Regular los honorarios de los Sres. letrados del recurrente Marina Baglioni y Rubi Horacio Zuain, en 2 JUS de manera conjunta y los del Defensor Oficial Diego

Hernán en 2 JUS (Art. 15 LA).

IV) Regístrese, notifíquese de conformidad con lo dispuesto en el CPCC y vuelvan.